



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

OSITRÁN

Organismo Supervisor de la
Inversión en Infraestructura de
Transporte de Uso Público



Firmado por: MEJIA
CORNEJO Juan
Carlos FAU
20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 10/03/2025
15:00:22 -0500

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL

Lima, 10 de marzo de 2025

N° 00042-2025-GG-OSITRAN

VISTOS:

El recurso de apelación presentado por APM Terminals Callao S.A. en contra de la Resolución de Gerencia de Supervisión y Fiscalización N° 0003-2025-GSF-OSITRAN; y, el Informe N° 00051-2025-GAJ-OSITRAN de fecha 7 de marzo de 2025, emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución de Gerencia de Supervisión y Fiscalización N° 0003-2025-GSF-OSITRAN, sustentada en el Informe N° 0001-2025-JFI-GSF-OSITRAN, se impuso a título de sanción, a la Entidad Prestadora APM Terminals Callao S.A. (en adelante, el Concesionario) una multa ascendente a 86.18 UIT por la comisión de la infracción tipificada en el numeral 35.2 del artículo 35° del Reglamento de Incentivos, Infracciones y Sanciones de Ositrán, aprobado por Resolución N° 009-2018-CD-OSITRAN, al haber incumplido su obligación referida al cumplimiento de los Niveles de Servicio y Productividad para el indicador de “Tiempo de atención al usuario para el retiro de su mercancía”, medición promedio trimestral, durante el Trigésimo Noveno Trimestre de explotación de la Concesión (enero – marzo 2021);

Que, a través de la Carta N° 00178-2025-APMTC/LEG, presentado con fecha 29 de enero de 2025, el Concesionario interpuso recurso de apelación contra la Resolución de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización N° 0003-2025-GSF-OSITRAN;

Que, por medio del Memorando N° 00065-2025-JFI-GSF-OSITRAN de fecha 04 de febrero de 2025, la Jefatura de Fiscalización de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización remite a la Gerencia General, con copia a la Gerencia de Asesoría Jurídica, el recurso mencionado en el párrafo anterior y el expediente correspondiente;

Que, mediante el Oficio N° 00057-2025-GG-OSITRAN, notificado el 10 de febrero de 2025, la Gerencia General comunicó al Concesionario el admisorio del recurso de apelación, conforme a la evaluación realizada por la Gerencia de Asesoría Jurídica a través del Memorando N° 0069-2025-GAJ-OSITRAN;

Que, luego del análisis efectuado, la Gerencia de Asesoría Jurídica mediante el Informe N° 00051-2025-GAJ-OSITRAN, recomendó declarar infundado el recurso de apelación presentado por el Concesionario, concluyendo lo siguiente:

IV. CONCLUSIONES

78. La sanción impuesta al Concesionario obedece al incumplimiento de los estándares de calidad del servicio, medidos con el indicador “Tiempo de atención al usuario para el retiro de su mercancía” correspondiente al Trigésimo Noveno trimestre de explotación (enero - marzo 2021), correspondiente a operaciones individuales, medición realizada de conformidad con lo dispuesto por la Metodología v3, incumplimiento que se encuentra debidamente acreditado.

79. Con relación a las deducciones que el Concesionario alega deben ser excluidas de la medición, se advierte que, en lo referido al cálculo del indicador “Tiempo de Atención al Usuario para el retiro de su mercancía” efectuado por la GSF, este responde a lo previsto en la Metodología v3, la cual no establece ninguna restricción que limite la medición del indicador a las transacciones realizadas exclusivamente después del período de cuatro horas

Visado por: SHEPUT STUCCHI
Humberto Luis FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 10/03/2025 14:52:39 -0500

Visado por: CHOCANO PORTILLO Javier
Eugenio Manuel Jose FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 10/03/2025 13:55:36 -0500



posteriores al cierre de operaciones de la nave. Esta afirmación se ve ratificada por la APN, entidad que aprobó dicho instrumento.

80. Respecto a las supuestas vulneraciones a los principios de motivación, legalidad y debido procedimiento, predictibilidad, imparcialidad, carga de la prueba, así como, una vulneración a la Constitución, a la Ley del Sistema Portuario Nacional y el alegado trato desigual o discriminatorio, son afirmaciones que a lo largo del presente informe han sido desvirtuadas, verificándose que la primera instancia actuó conforme a la normativa vigente, especialmente a la Metodología v3, cuyos requisitos no fueron cumplidos por APM, fundamentando adecuadamente su decisión, informando de manera oportuna y clara al Concesionario sobre las razones de la desestimación probatoria, lo que ha asegurado el respeto al derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva, así como a todos los principios establecidos en la normativa aplicable.

Que, tal como lo manifiesta la Gerencia de Asesoría Jurídica en el Informe N° 00051-2025-GAJ-OSITRAN, corresponde que el Tribunal en Asuntos Administrativos resuelva el recurso de apelación interpuesto, siendo que, de conformidad con lo establecido en la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del RIIS, en tanto no se constituya dicho órgano colegiado, las funciones de éste serán ejercidas por la Gerencia General;

Que, luego de revisar el Informe de vistos, la Gerencia General manifiesta su conformidad con los fundamentos y conclusiones de dicho Informe, razón por la cual lo constituye como parte integrante de la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 6.2 del artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS;

Por lo expuesto, en virtud a las facultades conferidas en el artículo 5 de la Ley N° 26917, Ley de Supervisión de la Inversión Privada en Infraestructura de Transporte de Uso Público; el numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos; el Reglamento de Organización y Funciones del Ositrán, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2015-PCM y sus modificatorias; y el Reglamento de Incentivos, Infracciones y Sanciones del Ositrán, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 009-2018-CD-OSITRAN y modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por APM Terminals Callao S.A. contra la Resolución de Gerencia de Supervisión y Fiscalización N° 0003-2025-GSF-OSITRAN y, en consecuencia, confirmar en todos sus extremos la indicada resolución, de conformidad con los fundamentos antes expuestos.

Artículo 2.- Notificar la presente Resolución y el Informe N° 00051-2025-GAJ-OSITRAN, a APM Terminals Callao S.A.; asimismo, poner tales documentos en conocimiento del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en su calidad de Concedente, de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización y de la Gerencia de Administración, para los fines correspondientes de acuerdo a ley.

Regístrese y comuníquese.

Firmado por
JUAN CARLOS MEJIA CORNEJO
Gerente General
Gerencia General



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

OSITRÁN

Organismo Supervisor de la
Inversión en Infraestructura de
Transporte de Uso Público

Visado por

JAVIER CHOCANO PORTILLO

Jefe de la Gerencia de Asesoría Jurídica

Gerencia de Asesoría Jurídica

Visado por

HUMBERTO SHEPUT STUCCHI

Asesor Legal Especializado en Concesiones y App de la GG

Gerencia General

NT 2025034124

Documento electrónico firmado digitalmente en el marco de la Ley N°27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, su Reglamento y modificatorias.
La integridad del documento y la autoría de la(s) firma(s) pueden ser verificadas en: <https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml>

INFORME N° 00051-2025-GAJ-OSITRAN

A : **JUAN CARLOS MEJÍA CORNEJO**
Gerente General

Asunto : Evaluación del recurso de apelación presentado por APM Terminals Callao S.A. contra la Resolución de Gerencia de Supervisión y Fiscalización N° 0003-2025-GSF-OSITRAN

Referencias : a) Memorando N° 0065-2025-JFI-GSF-OSITRAN
b) Expediente 202400047-PAS-OSITRAN

Fecha : 07 de marzo de 2025

I. OBJETO

1. El objetivo del presente informe es emitir opinión sobre el recurso de apelación interpuesto por APM Terminals Callao S.A. contra la Resolución N° 0003-2024-GSF-OSITRAN, emitida por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización del Ositrán (en adelante, GSF), mediante la cual se le impuso, a título de sanción, una multa ascendente a 86.18 UIT por haber incurrido en la infracción tipificada en el numeral 35.2 del artículo 35 del Reglamento de Incentivos, Infracciones y Sanciones del Ositrán, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 009-2018-CD-OSITRAN (en adelante, RIIS).

II. ANTECEDENTES

2. Con fecha 11 de mayo de 2011, el Estado Peruano, representado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en adelante, Concedente), actuando a través de la Autoridad Portuaria Nacional (en adelante, APN) y APM Terminals Callao S.A. (en adelante, APM o el Concesionario), suscribieron el Contrato de Concesión para el Diseño, Construcción, Financiamiento, Conservación y Explotación del Terminal Norte Multipropósito en el Terminal Portuario del Callao (en adelante, Contrato de Concesión).
3. Mediante el Informe N° 00364-2024-JCP-GSF-OSITRAN de fecha 24 de abril de 2024, la Jefatura de Contratos Portuarios (en adelante, JCP) comunicó a la Jefatura de Fiscalización (en adelante, JFI) el presunto incumplimiento de APM de los Niveles de Servicio y Productividad (en adelante, NSP) referidos al indicador de "Tiempo de atención al usuario para el retiro de su mercancía", correspondiente al Trigésimo Noveno trimestre de explotación de la Concesión (enero - marzo 2021).
4. A través del Oficio N° 00084-2024-JFI-GSF-OSITRAN de fecha 09 de julio de 2024, se notificó al Concesionario el inicio de un Procedimiento Administrativo Sancionador (en adelante, PAS) por el presunto incumplimiento de NSP referido al indicador "Tiempo de atención al usuario para el retiro de su mercancía", medición promedio trimestral, durante el Trigésimo Noveno trimestre de explotación de la Concesión (enero - marzo 2021), lo cual configuraría la presunta comisión de la infracción prevista en el inciso 35.2 del artículo 35 del RIIS; y, se le solicitó presente sus descargos en un plazo de diez (10) días hábiles.
5. Mediante Carta N° 1152-2024-APMTC/LEG de fecha 24 de julio de 2024, el Concesionario solicitó prórroga de cinco (5) días hábiles adicionales al plazo inicialmente otorgado para dar respuesta al Oficio N° 00084-2024-JFI-GSF-OSITRAN, el mismo que fue concedido mediante Oficio N° 00096-2024-JFI-GSF-OSITRAN.
6. A través de la Carta N° 1225-2024-APMTC/LEG de fecha 02 de agosto de 2024, el Concesionario presentó sus descargos contra el Oficio N° 00084-2024-JFI-GSF-OSITRAN.

7. Por medio del Memorando N° 00292-2024-JFI-GSF-OSITRAN de fecha 05 de setiembre de 2024, la JFI requirió a la JCP, la evaluación técnica respecto de los alegatos del Concesionario contra el Oficio de Imputación de Cargos N° 00084-2024-JFI-GSF-OSITRAN, en el marco de la tramitación del Expediente N° 202400047-PAS-OSITRAN.
8. Mediante el Memorando N° 00312-2024-JFI-GSF-OSITRAN de fecha 18 de septiembre de 2024, la JFI solicitó la prórroga de plazo de evaluación de descargos para la emisión del Informe Final de Instrucción.
9. A través del Memorando N° 00380-2024-JCP-GSF-OSITRAN de fecha 23 de septiembre de 2024, la JCP remitió a la JFI la evaluación técnica solicitada respecto de los alegatos técnicos del Concesionario presentados contra el Oficio N° 00084-2024-JFI-GSF-OSITRAN, en el marco de la tramitación del Expediente N° 202400047-PAS-OSITRAN.
10. Mediante el Oficio N° 12905-2024-GSF-OSITRAN, notificado el 24 de octubre de 2024, se remitió al Concesionario el Informe Final de Instrucción N° 00201-2024-JFI-GSF-OSITRAN, y se le otorgó el plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos y, de considerarlo necesario, exponga lo que considere pertinente.
11. Por medio de la Carta N° 1695-2024-APMTC/LEG de fecha 29 de octubre de 2024, el Concesionario solicitó prórroga para la presentación de sus descargos contra el Informe Final de Instrucción N° 000201-2024-JFI-GSF-OSITRAN, notificado con Oficio N° 12905-2024-GSF-OSITRAN, el mismo que fue concedido mediante Oficio N° 13783-2024-GSF-OSITRAN.
12. A través de la Carta N° 01754-2024-APMTC/LEG de fecha 08 de noviembre de 2024, el Concesionario presentó sus descargos contra el Informe Final de Instrucción N° 000201-2024-JFI-GSF-OSITRAN, notificado mediante el Oficio N° 12905-2024-GSF-OSITRAN.
13. Mediante el Memorando N° 00396-2024-JFI-GSF-OSITRAN de fecha 12 de diciembre de 2024, la JFI solicitó la prórroga de plazo para la emisión del Informe Final del Procedimiento.
14. Por medio del Informe N° 00001-2025-JFI-GSF-OSITRAN, Informe Final del Procedimiento, la JFI recomienda que se imponga al Concesionario, una multa ascendente a 86.18 UIT, por haber incurrido en la infracción prevista en el numeral 35.2 del artículo 35° del RIIS, respecto al incumplimiento de los indicadores “Tiempo de atención al usuario para el retiro de su mercancía”, medición promedio trimestral en el Trigésimo Noveno trimestre de explotación de la Concesión (enero – marzo 2021).
15. A través de la Resolución de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización N° 0003-2025-GSF-OSITRAN, notificada al Concesionario el 08 de enero de 2025 mediante el Oficio N° 00122-2025-GSF-OSITRAN, se resolvió lo siguiente:

“Artículo 1.- Declarar que la empresa Concesionaria APM Terminals Callao S.A. incumplió su obligación establecida en la cláusula 8.21, así como en el Anexo 3, del Contrato de Concesión, al haber incumplido con los Niveles de Servicio y Productividad respecto el indicador: “Tiempo de atención al usuario para el retiro de su mercancía”, medición promedio trimestral, en el trigésimo noveno trimestre de explotación de la Concesión (enero – marzo 2021), lo cual se encuentra tipificado en el numeral 35.2 del artículo 35° del Reglamento de Incentivos, Infracciones y Sanciones.

Artículo 2.- Imponer a la empresa Concesionaria APM Terminals Callao S.A., a título de sanción, una multa ascendente a **86.18 UIT.**”

16. Mediante la Carta N° 00178-2025-APMTC/LEG de fecha 29 de enero de 2025, el Concesionario presentó su escrito de apelación en contra de la Resolución de Gerencia de Supervisión y Fiscalización N° 0003-2025-GSF-OSITRAN.

17. Por medio del Memorando N° 00065-2025-JFI-GSF-OSITRAN de fecha 04 de febrero de 2024 de 2025, la GSF elevó a la Gerencia General el recurso de apelación interpuesto por el Concesionario, remitiendo la carpeta electrónica que contiene los archivos que conforman el Expediente PAS N° 202400047-PAS-OSITRAN con un listado de documentos adjuntos.
18. A través del Oficio N° 00057-2025-GG-OSITRAN de fecha 07 de febrero de 2025 y notificado el 10 de febrero de 2025, la Gerencia General comunicó al Concesionario la admisión a trámite del recurso de apelación interpuesto, conforme a la evaluación realizada por este despacho a través del Memorando N° 0069-2025-GAJ-OSITRAN.

III. ANÁLISIS

19. Según lo señalado en el objeto del presente Informe, a fin de evaluar el recurso de apelación interpuesto por APM, se abordarán y evaluarán los siguientes puntos:

A. Cuestiones Previas: Análisis de admisibilidad del recurso, competencia y plazo para resolver.

B. Análisis de los argumentos del Concesionario.

- B.1. Sobre el indicador "Tiempo de Atención al Usuario para el retiro de su mercancía" y la nueva información presentada a Ositrán.
- B.2. Sobre la supuesta vulneración al Deber de Motivación y a los Principios de Legalidad y Debido Procedimiento.
- B.3. Sobre la supuesta vulneración al Principio de Predictibilidad.
- B.4. Sobre la supuesta vulneración al Principio de Imparcialidad.
- B.5. Sobre la supuesta vulneración a la Carga de la Prueba.
- B.6. Sobre lo dispuesto en la Constitución y la Ley del Sistema Portuario Nacional.

A. **Cuestiones Previas: Análisis de admisibilidad del recurso, competencia y plazo para resolver.**

20. Antes de entrar al análisis de fondo, es importante precisar que el recurso de apelación interpuesto fue evaluado en cuanto al cumplimiento de los requisitos exigidos: de un lado, por el numeral 98.1 del artículo 98 del RIIS y, de otro lado, por los artículos 124¹ y 221² del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N°004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), habiéndose determinado que el referido recurso de apelación cumplía con los requisitos de admisibilidad,

¹ **Artículo 124.- Requisitos de los escritos**

Todo escrito que se presente ante cualquier entidad debe contener lo siguiente:

- 1. Nombres y apellidos completos, domicilio y número de Documento Nacional de Identidad o carné de extranjería del administrado, y en su caso, la calidad de representante y de la persona a quien represente.
- 2. La expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho que lo apoye y, cuando le sea posible, los de derecho.
- 3. Lugar, fecha, firma o huella digital, en caso de no saber firmar o estar impedido.
- 4. La indicación del órgano, la entidad o la autoridad a la cual es dirigida, entendiéndose por tal, en lo posible, a la autoridad de grado más cercano al usuario, según la jerarquía, con competencia para conocerlo y resolverlo.
- 5. La dirección del lugar donde se desea recibir las notificaciones del procedimiento, cuando sea diferente al domicilio real expuesto en virtud del numeral 1. Este señalamiento de domicilio surte sus efectos desde su indicación y es presumido subsistente, mientras no sea comunicado expresamente su cambio.
- 6. La relación de los documentos y anexos que acompaña, indicados en el TUPA.
- 7. La identificación del expediente de la materia, tratándose de procedimientos ya iniciados. (*)
(Texto según el artículo 113 de la Ley N° 27444).

² **Artículo 221.- Requisitos del recurso**

El escrito del recurso deberá señalar el acto del que se recurre y cumplirá los demás requisitos previstos en el artículo 124.

(Texto según el artículo 211 de la Ley N° 27444, modificado según el artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272)

procedencia y forma previstos en tales normas, motivo por el cual fue admitido a trámite mediante Oficio N° 00057-2025-GG-OSITRAN, sobre la base del Memorando N° 0069-2025-GAJ-OSITRAN.

21. De otro lado, cabe señalar que, conforme a lo establecido en el numeral 98.2 del artículo 98 del RIIS, el Tribunal en Asuntos Administrativos resolverá el recurso de apelación en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la presentación de dicho recurso. Es importante mencionar que, de conformidad con lo establecido en la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del RIIS, en tanto no se constituya el Tribunal en Asuntos Administrativos, las funciones de este serán ejercidas por la Gerencia General.
22. En la medida en que el recurso de apelación fue presentado ante el Ositrán el 29 de enero de 2025, el plazo para resolver el recurso de apelación presentado por el Concesionario vencerá el 12 de marzo de 2025.

B. Análisis de los argumentos del Concesionario.

23. Previo a realizar el análisis propio de los argumentos del Concesionario es oportuno citar las disposiciones aplicables al presente caso:

- Artículo 35 del RIIS del Ositrán:

“Artículo 35°.- Incumplir las condiciones o especificaciones de operación

35.1 La Entidad Prestadora que no cumpla con las condiciones, especificaciones técnicas, requisitos mínimos y otros relacionados con la operación de la infraestructura o la prestación del servicio, establecidos en el Contrato de Concesión, en la Disposición o en la regulación del OSITRAN o en la Normativa Aplicable, incurrirá en infracción leve.

35.2 La Entidad Prestadora que cometa la infracción descrita en el numeral precedente y además limite el acceso a la Facultad Esencial, la provisión de servicios o la calidad, establecidos en el Contrato de Concesión, en la Disposición o en la regulación del OSITRAN o en la Normativa Aplicable, incurrirá en infracción grave.

[...]

(Subrayado agregado)

- Cláusula 8.21 del Contrato de Concesión:

“La SOCIEDAD CONCESIONARIA deberá cumplir, cuando menos, con los Niveles de Servicio y Productividad indicados en el Anexo 3, para la prestación de los Servicios Estándar, sujeto a lo dispuesto en el mismo.

La SOCIEDAD CONCESIONARIA deberá entregar al REGULADOR la información necesaria para acreditar el cumplimiento de lo establecido en dicho anexo, de manera trimestral, dentro de los primeros quince (15) Días Calendario del mes posterior al que será motivo de evaluación.

[...]

(Subrayado agregado)

- Anexo 3 del Contrato de Concesión:

[...]

El cumplimiento de los indicadores que se establecen a continuación se verificará en base al promedio trimestral o por operación, según sea el caso.

[...]

- I. Niveles de Servicio y Productividad de la Infraestructura Portuaria existente a partir de la fecha de Toma de Posesión y/o futura Infraestructura Portuaria*

[...]

b) Niveles de Servicio y Productividad para cualquier tipo de carga:

- Tiempo de atención al Usuario para el retiro de su mercancía: Una vez que el cliente haya realizado el pago de los derechos aduaneros que correspondan y obtenga la autorización del terminal, el tiempo posterior a este proceso no deberá ser mayor a treinta (30) minutos en promedio computados desde que el Usuario ingresa con su unidad al Terminal hasta que salga de la misma. Los treinta (30) minutos se computarán desde el ingreso de cada unidad de transporte.

[...]

La metodología para la medición de los Niveles de Servicio y Productividad será establecida por la APN.

[...]

(Subrayado agregado)

B.1. Sobre el indicador "Tiempo de Atención al Usuario para el retiro de su mercancía" y la nueva información presentada a Ositrán

24. El Concesionario manifiesta su discrepancia con la primera instancia respecto a la suficiencia de la información proporcionada por APM para justificar la ocurrencia de los deducibles relacionados con la "Carga Lista", "Aseguramiento de la Carga" e "Inicio del carguío del camión" en las mediciones de desempeño. Asimismo, argumenta que, en el desarrollo del PAS, ha cumplido con los requisitos estipulados en la Metodología v3, resaltando que el cálculo del "Tiempo de Atención al Usuario" debe realizarse desde el ingreso de la unidad de transporte al terminal hasta su salida, excluyendo el tiempo previo a la preparación de la carga. Así, el Concesionario considera que el indicador debe computarse solo a partir de cuatro horas después del cierre de operaciones de la nave, momento en que la carga se considera lista para entrega; sin embargo, la GSF insiste en que la Metodología v3 no establece tal criterio sin explicar cuál es la interpretación adecuada que se debe dar a dicho instrumento.
25. Asimismo, APM resalta que ha presentado información adicional como el reporte extraído directamente del sistema MOST, que registra los hitos inicial y final de los deducibles de carga lista, aseguramiento de carga e inicio de carguío de camión, sistema aprobado por Ositrán que contiene información completa y relevante sobre las operaciones portuarias involucradas, lo que refuerza la credibilidad de los datos aportados. Además, afirma que ha sustentado la veracidad de estos datos utilizando la información pública de la Consulta de Manifiesto de SUNAT y una declaración de autenticidad del reporte, que certifica la veracidad de la información en dicho reporte, la cual debe considerarse cierto mientras no se demuestre lo contrario, según la normativa vigente.
26. El Concesionario enfatiza que esta declaración de autenticidad refuerza y complementa la evidencia presentada y que, en su conjunto, toda la información debe ser valorada por Ositrán. Esta incluye el desarrollo detallado de cómo se obtienen los tiempos de los hitos en la operación portuaria, el PDF del Reporte extraído del Sistema MOST correspondiente al Trigésimo Noveno Trimestre de Explotación (enero-marzo 2021), la fuente del Reporte 4.4, y la declaración de autenticidad de la información, junto con el propio reporte P.4.4, que contiene los tiempos de los hitos mencionados. Finalmente, APM alega que esta documentación acredita debidamente la no imputabilidad de los deducibles.
27. Por otro lado, el Concesionario hace referencia al numeral 25 del Informe Final mediante el cual el regulador indicó que la información presentada por APMTTC en sus reportes de hechos sustentado en las declaraciones de autenticidad no son suficientes para sustentar un tema técnico; así como también al numeral 56 del Informe Final, en el que se cuestionan los descargos formulados por APM. Al respecto, indica que Ositrán insiste en señalar que no se ha cumplido con la "debida acreditación", a pesar de que APM ha cumplido con presentar medios probatorios que, según lo indicado, acreditan debidamente el deducible.

28. Finalmente, APM reafirma que ha cumplido con proporcionar los medios probatorios necesarios para acreditar la existencia de deducibles en la medición del indicador. Entre estos medios, ha presentado documentos detallados sobre los hitos inicial y final, los reportes del sistema MOST, la declaración de autenticidad de los datos y el sustento de la información pública disponible. Por lo tanto, corresponde a Ositrán fundamentar adecuadamente su imputación o, en su defecto, reconocer la validez de la información proporcionada por APM.

Análisis de los argumentos del Concesionario

29. Con relación al indicador "Tiempo de Atención al Usuario para el retiro de su mercancía", el Concesionario plantea dos cuestionamientos: uno referido a lo establecido en la metodología, que incide en la forma en que se calcula el indicador, y otro referido a la acreditación de los deducibles.
30. Con relación a la forma de cálculo según lo establecido por la Metodología v3, esta Gerencia considera relevante referirse al análisis efectuado por la JCP en los numerales 13 y 14 del Memorando N° 00380-2024-JCP-GSF-OSITRAN, en el cual se rebate la postura del Concesionario respecto a que el cálculo del indicador "Tiempo de Atención al Usuario para el retiro de su mercancía" debe realizarse solo a partir de cuatro (04) horas después del cierre de operaciones de la nave, momento en que la carga se considera lista para entrega:

"a.3 Respecto a las cuestiones en discusión del resultado de la medición del indicador materia de análisis

13. En relación con el extremo de sus argumentos descritos descritos en los numerales 4 y 5 de su Carta 1225, el Concesionario señala que
- (i) *Habría una discrepancia en los resultados obtenidos por OSITRAN en la medición, en promedio trimestral, del indicador "Tiempo de atención al Usuario para el retiro de su mercancía", debido a que OSITRAN no habría:*
 - (i.1) Considerado la validez de la información presentada por APM Terminals para los deducibles de carga fraccionada correspondientes a:
 - La carga lista habiendo transcurrido 4 horas del término de operación de la nave; y
 - El aseguramiento de la carga;
 - (i.2) Considerado la validez de la información presentada por APM Terminals para el deducible de carga sólida a granel: Inicio de carguío de camión; y, además,
 - (ii) Habría remitido información adicional para acreditar los deducibles descritos en los puntos (i.1) y (i.2) precedentes.
14. Al respecto, de la evaluación de los argumentos antes señalados, se tiene lo siguiente:
- En relación con los hechos descritos en la viñeta (i.1) precedente, se precisa lo indicado a continuación:
 - Como consta en el Informe N° 00364-2024-JCP-GSF-OSITRAN (Informe de Hallazgo), de acuerdo con lo manifestado por el Concesionario, en cuanto a carga fraccionada, de las 22,920 transacciones realizadas durante el período de evaluación, 21,623 transacciones presentarían registro de tiempos deducibles, de las cuales se tienen:
 - 16,292 registros de tiempos deducibles para las transacciones de carga fraccionada respecto a "carga lista habiendo transcurrido 4 horas del término de la operación de la nave";

- 5,331 registros de tiempos deducibles para las transacciones de carga fraccionada respecto a “aseguramiento de la carga”;
 - Asimismo, mediante su Carta 1225 y sus anexos presentados (Anexo 01: “REPORTE_EXTRAIDO_DEL_SISTEMA_MOST_Y_DECLARACION_DE_AUTENTICIDAD” en formato PDF y Anexo 01: “P_4_3_ATENUSUA_TMN_2021TRIMESTRE_I_-ACTUALIZADO” en formato xlsx), el Concesionario reitera la presunción de tiempos deducibles relacionados a 21,623 transacciones;
 - Al respecto, conforme a lo señalado en el numeral 60 del Informe de Hallazgo, en relación con los deducibles referidos a la carga lista, la Metodología v3 establece criterios aplicables a la medición del indicador materia de análisis, los cuales se indican a continuación
 - **Deberá exceptuarse el tiempo acumulado del referido deducible desde el momento que el camión ingresa al Terminal Norte Multipropósito** (en adelante, hito inicial del deducible carga lista) hasta que la carga se encuentre lista para ser entregada al usuario (en adelante, hito final del deducible carga lista). En este escenario, el hito final del deducible carga lista será considerado como el hito inicial de medición del indicador materia de análisis referido a la carga fraccionada y **el hito final será considerado el momento en que el camión sale del Terminal Norte Multipropósito**;
 - Deberá considerarse que después de las cuatro (04) horas posteriores del término de las operaciones de la nave, la carga se encontrará lista para ser entregada al usuario. En este escenario, cuando la carga se encuentre lista para ser entregada al usuario (cuatro (04) horas después del término de las operaciones de la nave) el Concesionario permitirá el ingreso del camión al Terminal Norte Multipropósito para entregarle la carga del usuario;
- ello, de conformidad con los párrafos primero y segundo posteriores a la viñeta “Carga fraccionada (bobinas, tubos, planchas entre otros)” contenida en el literal b) del numeral 1 de la Metodología v3 precitados en el inciso i.1.2 de la sección IV del Informe de Hallazgo;
- Teniendo en cuenta los criterios metodológicos antes señalados, se tiene lo siguiente:
 - Para que OSITRAN pueda considerar en la medición del indicador materia de análisis el tiempo acumulado de alguno de los presuntos deducibles referidos a la carga lista correspondientes a las 16,292 transacciones vinculadas a la carga fraccionada, corresponde al Concesionario presentar la información debidamente acreditada que evidencie,
 - El hito inicial del deducible de carga lista y;
 - El hito final del deducible de carga lista;
 - Al respecto, se advierte lo siguiente:
 - La información presentada por el Concesionario en su Carta 1225 (incluyendo su Reporte P.4.3 actualizado y PDFs del Reporte extraído del Sistema Operativo MOST correspondiente al Trigésimo Noveno Trimestre de Explotación (enero a marzo de 2021), fuente del Reporte 4.4 y declaración de su autenticidad) no contiene el sustento debidamente acreditado de ninguno de los presuntos deducibles alegados por este;
 - o Los argumentos del Concesionario referidos a que OSITRAN habría confirmado su entendimiento referido a que para la medición del indicador Tiempo de Atención al Usuario para el retiro de su mercancía, se debe considerar únicamente las transacciones que se realicen después de las

cuatro (04) horas posteriores del término de las operaciones de la nave (excluyendo a toda aquella transacción que se realice en períodos distintos al señalado por el Concesionario), es incorrecto;

- De hecho, en ningún período de evaluación, el OSITRAN ha excluido alguna transacción, que se haya realizado en un determinado período de evaluación, para la medición del indicador antes mencionado, debido a lo siguiente:
 - La Metodología v3 no señala ningún escenario en el que la medición del indicador Tiempo de atención al Usuario para el retiro de su mercancía deba ser efectuada únicamente a las transacciones que se realicen después de las cuatro (04) horas posteriores del término de las operaciones de la nave;
 - Lo descrito en viñeta precedente ha sido ratificado por la Autoridad Portuaria Nacional mediante Informe Técnico Legal N° 059-2022-APN-UAJ-DOMA adjunto a su Oficio N° 0825-2022-APN-GG-UAJ que fueran remitidos por el OSITRAN al Concesionario mediante Oficio N° 12387-2022-GSF-OSITRAN de fecha 31 de diciembre de 2022.

[...].”

(Subrayado y énfasis nuestro)

31. Tal como se observa, la JCP advierte que la postura de APM, que propone que el cálculo del indicador "Tiempo de Atención al Usuario para el retiro de su mercancía" debe realizarse solo a partir de las cuatro (04) horas posteriores al cierre de operaciones de la nave, carece de fundamento puesto que la Metodología v3, aprobada por la Autoridad Portuaria Nacional mediante Resolución N° 034-2012-APN/DIR, no establece ninguna restricción que limite la medición del indicador a las transacciones realizadas exclusivamente después de dicho plazo. Por el contrario, la metodología señala que el cálculo del indicador debe considerar el "hito inicial" desde el ingreso del camión al terminal y el "hito final" cuando la carga es entregada al usuario, sin excluir de la medición las transacciones previas a las cuatro horas posteriores al cierre de las operaciones de la nave.
32. En este punto, es importante enfatizar lo señalado por la primera instancia en el sentido que la propia Autoridad Portuaria Nacional ha ratificado que la Metodología no excluye transacciones para la medición de este indicador, de acuerdo con lo señalado en el Informe Técnico Legal N° 059-2022-APN-UAJ-DOMA adjunto al Oficio N° 0825-2022-APN-GG-UAJ, documentos que fueron remitidos por el Ositrán al Concesionario mediante Oficio N° 12387-2022-GSF-OSITRAN de fecha 31 de diciembre de 2022.
33. De otro lado, en torno a los deducibles, se observa que el Concesionario no ha acreditado debidamente los tiempos de "carga lista", puesto que la información presentada no contiene el sustento documental suficiente para validar los hitos de inicio y fin de dichos deducibles, lo que impide su inclusión en el cálculo del indicador "Tiempo de Atención al Usuario".
34. En la misma línea, es relevante destacar el numeral 13, los últimos párrafos del numeral 14 y el numeral 15 del Memorando N° 00355-2024-JCP-GSF-OSITRAN, en los cuales se realiza un análisis sobre los deducibles en el cálculo del indicador "Tiempo de Atención al Usuario para el retiro de la mercancía", de la siguiente manera:

“a.3 Respecto a las cuestiones en discusión del resultado de la medición del indicador materia de análisis

13. En relación con el extremo de sus argumentos descritos descritos en los numerales 4 y 5 de su Carta 1225, el Concesionario señala que

(iii) *Habría una discrepancia en los resultados obtenidos por OSITRAN en la medición, en promedio trimestral, del indicador “Tiempo de atención al Usuario para el retiro de su mercancía”, debido a que OSITRAN no habría:*

(i.1) Considerado la validez de la información presentada por APM Terminals para los deducibles de carga fraccionada correspondientes a:

- La carga lista habiendo transcurrido 4 horas del término de operación de la nave; y
- El aseguramiento de la carga;

(i.2) Considerado la validez de la información presentada por APM Terminals para el deducible de carga sólida a granel: Inicio de carguío de camión; y, además,

(iv) Habría remitido información adicional para acreditar los deducibles descritos en los puntos (i.1) y (i.2) precedentes.

14. Al respecto, de la evaluación de los argumentos antes señalados, se tiene lo siguiente: (...)

• Asimismo, con relación a los deducibles referidos a la “Carga lista” y “Aseguramiento de la carga”, descritos en la Metodología v3, resulta pertinente señalar lo siguiente:

○ Conforme a lo señalado en el Informe N.º 00364-2024-JCP-GSF-OSITRAN (Informe de Hallazgo), la declaración unilateral del Concesionario respecto a que habría cumplido con acreditar el tiempo acumulado de los referidos deducibles no implica necesariamente que estos tiempos deben ser aceptados como deducibles, aun cuando dicha declaración se encuentre contenido en

▫ *Formatos establecidos y aprobados por OSITRAN;*

▫ *Formatos adjuntos a un documento donde el Concesionario declare que la información, correspondiente a los hitos (inicial y final) de presuntos deducibles, contenida en dichos formatos es fidedigna del sistema operativo del Terminal Norte Multipropósito;*

▫ *Ello, toda vez que conforme al Contrato de Concesión y la Metodología v3 los tiempos de demora que no se tomarán en cuenta en la medición son aquellos ocasionados por aquellos hechos no imputables al administrador portuario debidamente acreditados, teniéndose que en este caso dicha declaración no acredita la no imputabilidad del Concesionario;*

○ *En ese sentido, teniendo en cuenta que el Concesionario se encontraría en mejor posición para poder acreditar la ocurrencia de algún hecho que no le sea imputable (deducible), en la medida que el Concesionario presente el registro y evidencia de algún hecho que no le sea imputable (deducible) debidamente acreditado, en cumplimiento con sus obligaciones tipificadas en la Metodología v3, y no únicamente una declaración unilateral, el tiempo acumulado de dicho deducible será exceptuado de la medición del indicador materia de análisis y, en general, de cualquiera de los indicadores que forman parte de los Niveles de Servicio y Productividad del Terminal Norte Multipropósito sujetos a medición por parte de OSITRAN, de conformidad con la Metodología v3.*

• *Con base a lo antes señalado, se tiene que la declaración del Concesionario respecto a que habría cumplido con acreditar el tiempo acumulado de los deducibles antes mencionados es incorrecta, toda vez que el Concesionario no ha remitido evidencia o cualquier documentación que permita contrastar o acreditar la ocurrencia de dichos deducibles y la sola declaración del Concesionario no acredita la no imputabilidad de los referidos deducibles;*

• *En consecuencia, este argumento del Concesionario no modifica la presunción de que el valor del referido indicador superó el máximo permisible de 30 minutos;*

- En relación con los hechos descritos en la viñeta (i.2) precedente, se precisa lo indicado a continuación:
 - Como consta en el Informe N.º 00364-2024-JCP-GSF-OSITRAN (Informe de Hallazgo), de acuerdo con la información remitida por el Concesionario, en cuanto a carga sólida a granel, de las 42,755 transacciones realizadas durante el período de evaluación, 39,909 transacciones presentarían registro de tiempos deducibles, de las cuales se tienen:
 - 39,039 registros de tiempos deducibles para las transacciones de carga fraccionada respecto a “inicio de carguío de camión”.
 - Mediante su Carta 22 5, el Concesionario ha remitido el documento denominado como ANX_ANEXO_1_-_P_4_3_ATENUSUA_TMN_2021TRIMESTRE_I_-_ACTUALIZADO, el cual, según lo manifestado por el Concesionario, contiene el reporte actualizado de los tiempos de los hitos (inicial y final) de los deducibles de inicio de carguío al camión ;
 - Al respecto, conforme a lo señalado en el numeral 6 3 del Informe de Hallazgo, en relación con los deducibles referidos al inicio de carguío de camión, la Metodología v3 establece criterios aplicables a la medición del indicador materia de análisis, los cuales se indican a continuación
 - Deberá exceptuarse el tiempo acumulado del referido deducible desde el momento que el camión ingresa al Terminal Norte Multipropósito (en adelante, hito inicial del deducible inicio de carguío en el camión) hasta el momento que se inicia la carga en el camión (en adelante, hito final del deducible inicio de carguío en el camión). En este escenario, el hito final del deducible inicio de carguío en el camión será considerado como el hito inicial de medición del indicador materia de análisis referido a la carga sólida a granel y el hito final será considerado el momento en que el camión sale del Terminal Norte Multipropósito;
- ello, de conformidad con el primer párrafo posterior a la viñeta “Carga sólida a granel (granel en general o fertilizantes)” contenida en el literal b) del numeral 1 de la Metodología v3 precitados en el inciso i.1.3 de la sección IV del Informe de Hallazgo;
- Teniendo en cuenta los criterios metodológicos antes señalados, se tiene lo siguiente:
 - Para que OSITRAN pueda considerar en la medición del indicador materia de análisis el tiempo acumulado de alguno de los presuntos deducibles referidos al inicio de carguío en el camión correspondientes a las 3 9,909 transacciones vinculadas a la carga sólida a granel, corresponde al Concesionario presentar la información debidamente acreditada que evidencie,
 - El hito inicial del deducible de inicio de carga en el camión y;
 - El hito final del deducible de inicio de carga en el camión;
- Al respecto, se advierte lo siguiente:
 - La información presentada por el Concesionario en su Carta 122 5 (incluyendo su Reporte P.4.3 actualizado y PDF del Reporte extraído del Sistema Operativo MOST correspondiente al Trigésimo Noveno Trimestre de Explotación (enero a marzo de 202 1), fuente del Reporte 4.4 y declaración de su autenticidad) no contiene el sustento debidamente acreditado de ninguno de los presuntos deducibles alegados por este;
- Asimismo, con relación a los deducibles referidos al “inicio de carguío en el camión”, descritos en la Metodología v3, resulta pertinente señalar lo siguiente:

- Conforme a lo señalado en el Informe N.º 00364-2024-JCP-GSF-OSITRAN (Informe de Hallazgo), la declaración unilateral del Concesionario respecto a que habría cumplido con acreditar el tiempo acumulado de los referidos deducibles no implica necesariamente que estos tiempos deben ser aceptados como deducibles, aun cuando dicha declaración se encuentre contenido en
 - Formatos establecidos y aprobados por OSITRAN;
 - Formatos adjuntos a un documento donde el Concesionario declare que la información, correspondiente a los hitos (inicial y final) de presuntos deducibles, contenida en dichos formatos es fidedigna del sistema operativo del Terminal Norte Multipropósito;
 - Ello, toda vez que conforme a la Metodología v3 los tiempos de demora que no se tomarán en cuenta en la medición son aquellos ocasionados por aquellos hechos no imputables al administrador portuario debidamente acreditados, teniéndose que en este caso dicha declaración no acredita la no imputabilidad del Concesionario;
 - En ese sentido, teniendo en cuenta que el Concesionario se encontraría en mejor posición para poder acreditar la ocurrencia de algún hecho que no le sea imputable (deducible), en la medida que el Concesionario presente el registro y evidencia de algún hecho que no le sea imputable (deducible) debidamente acreditado, en cumplimiento con sus obligaciones tipificadas en la Metodología v3, y no únicamente una declaración unilateral, el tiempo acumulado de dicho deducible será exceptuado de la medición del indicador materia de análisis y, en general, de cualquiera de los indicadores que forman parte de los Niveles de Servicio y Productividad del Terminal Norte Multipropósito sujetos a medición por parte de OSITRAN, de conformidad con la Metodología v3.
 - Con base a lo antes señalado, se tiene que la declaración del Concesionario respecto a que habría cumplido con acreditar el tiempo acumulado de los deducibles antes mencionados es incorrecta, toda vez que el Concesionario no ha remitido evidencia o cualquier documentación que permita contrastar o acreditar la ocurrencia de dichos deducibles y la sola declaración del Concesionario no acredita la no imputabilidad de los referidos deducibles;
 - En consecuencia, este argumento del Concesionario no modifica la presunción de que el valor del referido indicador superó el máximo permisible de 30 minutos;
 - De la evaluación de los argumentos descritos en la viñeta (ii) precedente, se tiene que la información remitida por el Concesionario no contiene el sustento debidamente acreditado de ninguno de los presuntos deducibles alegados por este, conforme a lo señalado precedentemente en la evaluación de los argumentos descritos en las viñetas (i.1) y (i.2);
15. A partir de la evaluación de las alegaciones presentada por el Concesionario, se tiene que el Concesionario no ha presentado argumentos que modifiquen las conclusiones abordadas en la sección VII del Informe de Hallazgo vinculado al indicador "Tiempo de Atención al Usuario para el retiro de su mercancía", en promedio trimestral, correspondiente al período de evaluación."

(Subrayado y énfasis nuestro)

35. Como se puede observar, Ositrán no considera los deducibles en el cálculo del indicador "Tiempo de Atención al Usuario para el retiro de su mercancía", dado que APM no ha cumplido con lo establecido en la Metodología v3 para acreditar la ocurrencia de dichos deducibles. Si bien el Concesionario presentó información adicional extraída del sistema MOST, esta se limita a registrar los hitos inicial y final de los deducibles de carga lista, sin aportar documentos

que respalden los registros, de manera que resulten suficientes para acreditar que los tiempos de demora fueron ajenos a su responsabilidad, como lo exige la Metodología v3.

36. Esta metodología exige una justificación adecuada que acredite la no imputabilidad de los hechos vinculados a los deducibles; sin embargo, APM no ha presentado registros verificables. Ante esta carencia de documentación, Ositrán concluye que estos tiempos no pueden ser excluidos del cálculo del indicador, lo que mantiene lo evidenciado por la medición efectuada por la GSF, según la cual el valor del indicador superó el límite máximo permisible de 30 minutos y, por tanto, confirma el incumplimiento de los niveles de servicio exigidos en la Metodología v3.
37. Asimismo, a la luz de lo expuesto, se advierte que la declaración de autenticidad del reporte del sistema MOST, aunque certifica la veracidad de los datos en dicho reporte, no cumple con los estándares de prueba exigidos por la Metodología v3 para excluir tiempos en el cálculo del indicador "Tiempo de Atención al Usuario para el retiro de su mercancía", dado que la mera declaración unilateral del Concesionario, incluso cuando se emite en formatos aprobados por Ositrán, no constituye evidencia suficiente para demostrar que los tiempos deducibles de "Carga Lista" y "Aseguramiento de la Carga" corresponden a hechos no imputables al Concesionario, siendo necesario que el Concesionario sustente debidamente los deducibles tal como lo exige el marco normativo aplicable.
38. En efecto, la información contenida en los reportes es registrada por el propio Concesionario, por ende, constituye una declaración que por sí sola no resulta suficiente para deducir tiempos del cálculo efectuado por el Ositrán respecto del indicador materia de análisis; ello, en la medida que carece de la documentación que permita contrastar dicho registro, de manera que exista certeza respecto de la ocurrencia de los hechos registrados y de que la exclusión del tiempo de demora en la medición responda efectivamente a lo previsto en la Metodología v3. En consecuencia, la declaración de autenticidad de los reportes no desvirtúa lo evidenciado por la medición efectuada por la GSF, según la cual el tiempo acumulado excede el límite máximo permitido para el indicador mencionado.
39. En respuesta a las afirmaciones del Concesionario respecto a los numerales 25 y 56 del Informe Final, esta gerencia considera que Ositrán ha fundamentado adecuadamente las razones por las cuales ha desestimado los medios probatorios presentados por APM. De esta manera, en ningún momento ha adoptado una interpretación restrictiva respecto a los documentos presentados, ya que, si bien la Declaración Jurada asegura que el Reporte es un extracto fidedigno del Sistema MOST, dicha información no es posible ser contrastada. En ese sentido se desestima que la declaración jurada del Concesionario sea un instrumento idóneo para acreditar los datos vinculados con presuntos deducibles, dado que no cumple con el nivel de certeza y fiabilidad requerido por la normativa aplicable, más aún, cuando es obligación del Concesionario aportar documentación solvente que permita generar certeza del cumplimiento de sus obligaciones, lo cual a la fecha de emisión del presente informe no ha sucedido, pues el Concesionario no ha proporcionado información técnica adicional que respalde las afirmaciones contenidas en la declaración jurada.
40. De acuerdo con lo antes expuesto, el cálculo del indicador "Tiempo de Atención al Usuario para el retiro de su mercancía" efectuado por el Ositrán responde a lo previsto en la Metodología v3, tal como lo ratifica la entidad que aprobó dicho instrumento; asimismo, la información adicional presentada por el Concesionario no acredita debidamente los tiempos deducibles de la medición de dicho indicador, de conformidad con lo previsto en la mencionada metodología. En consecuencia, los argumentos del Concesionario en este extremo deben ser desestimados.

B.2. Sobre la supuesta vulneración al Deber de Motivación y a los Principios de Legalidad y Debido Procedimiento

41. El Concesionario alega que Ositrán ha vulnerado el principio de legalidad, argumentando que, a pesar de haber acreditado debidamente los tiempos deducibles conforme a lo solicitado por el propio Regulador, este persiste en afirmar que APM no ha cumplido con la "debida acreditación". Según el Concesionario, Ositrán presenta argumentos repetitivos y circulares, sin proporcionar una justificación clara y detallada sobre las razones por las cuales las pruebas aportadas fueron consideradas inválidas, lo cual afecta al principio de legalidad y vulnera el derecho a la debida motivación, afectando el debido procedimiento y limitando la capacidad de defensa del administrado. Asimismo, sostiene que al calificar sistemáticamente como "insuficientes" los medios probatorios presentados para justificar los deducibles, Ositrán vulnera también el derecho a la debida motivación y, a su vez, el principio del debido procedimiento.

Análisis de los argumentos del Concesionario

42. Al respecto, resulta relevante destacar los numerales 73 al 81 y del 86 al 87 del Informe Final N° 00001-2025-JFI-GSF-OSITRAN -que sustentó la Resolución Impugnada- que desestima la afirmación de que Ositrán habría infringido el deber de motivación, así como los principios de legalidad y debido procedimiento, según lo siguiente:

"Con relación a la supuesta vulneración al principio de Legalidad

73. *Con relación a la supuesta vulneración al principio de legalidad alegada por el Concesionario, resulta pertinente señalar que nuestro ordenamiento jurídico dispone que, para el ejercicio de cualquier potestad o realización de una actuación administrativa por parte de las entidades de la Administración Pública, así como para la exigencia del cumplimiento de obligaciones a los administrados; dichas facultades deberán encontrarse atribuidas o establecidas previa y expresamente por el ordenamiento jurídico vigente.*

74. *Es decir, los sujetos de Derecho Público sólo pueden hacer aquello que les sea expresamente facultado, en virtud de una regla de derecho preexistente. Esta exigencia se encuentra contemplada de forma expresa en el numeral 1.1 del Artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004 -2019 -JUS (en adelante, "LPAG"), que recoge la observancia del principio de legalidad como pilar y fundamento de la actuación llevada a cabo por las Entidades de la Administración Pública.*

75. *Así, el principio de legalidad debe ser entendido como un principio general de juridicidad, en virtud del cual se garantiza el sometimiento de la Administración a todo el ordenamiento jurídico, y no solamente la Constitución Política.*

76. *Una manifestación de este tipo de sometimiento es, justamente, la observancia de aquellos principios que regulan y limitan las potestades de la Administración Pública, y que constituyen una verdadera garantía para los administrados.*

77. *En lo que concierne a la imposición de sanciones, en tanto actos de gravamen, la observancia de estos principios cobra mucha mayor relevancia, puesto que la excepcionalidad de la potestad sancionadora de la Administración hace imprescindible garantizarle a los administrados, cuando menos, la no imposición de sanciones administrativas atípicas, sin culpa, e irrazonables; sin perjuicio de la observancia de otros principios aplicables al procedimiento administrativo y que configuran lo que nuestro ordenamiento, la jurisprudencia y la doctrina definen como debido procedimiento administrativo.*

78. *Al respecto, Rolando Tamayo y Salmorán se refiere al principio de legalidad de la siguiente forma:*

"[...] el principio de legalidad es presupuesto en todo el discurso jurídico, tanto en la 'descripción' (textos y tratados) como en la argumentación (alegatos). El principio opera en dos niveles: descriptivo y justificativo. El tenor del principio podría formularse así: (1) es regla de competencia; i. e., es el derecho de un Estado [...] todo acto jurídico (orden, decisión, mandato) supone una norma jurídica que confiere

facultades; todo poder o facultad requiere necesariamente de fundamentación jurídica. (2) La legalidad debe controlar los actos de los funcionarios (e. g., el exceso o desvío de poder, decisión ultra vires, son cuestiones jurídicas).

79. Por otro lado, VELARDE RODRÍGUEZ, refiere sobre el principio de legalidad lo siguiente

“El concepto de legalidad o primacía de la Ley viene a ser un principio fundamental conforme al cual todo ejercicio del poder público debería estar sometido a la voluntad de la ley y de su jurisdicción y no a la voluntad de las personas, y el Estado sometido a la Constitución o al imperio de la ley. Por ello, el principio de legalidad establece la seguridad jurídica.”

80. En la misma línea, el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial han señalado en sus pronunciamientos, sobre el citado principio, lo siguiente:

“Este principio (de legalidad) proscrib[e] la posibilidad de atribuir la comisión de una falta o de aplicar una sanción, si cada una de ellas no se encuentra previamente determinada en la ley o norma con rango de ley. De ello se desprenden las siguientes exigencias: la prohibición de la aplicación retroactiva de la ley penal o norma sancionatoria (lex praevia), la prohibición de la aplicación de otro derecho que no sea el escrito (lex scripta), la prohibición de la analogía (lex stricta) y de cláusulas legales indeterminadas (lex certa, taxatividad o tipicidad). La última de ellas referida al principio de tipicidad como una de las manifestaciones del principio de legalidad”

“El principio de legalidad exige que las autoridades sometan su actuación al imperio de la ley, por lo que para efecto de ejercer la cobranza de tributos deberán sujetarse a las formas, plazos y procedimientos preestablecidos en la ley; así también, constituye una garantía contra la arbitrariedad, pues proscrib[e] toda acción basada en la simple voluntad o intereses personales”

81. Por lo tanto, en el presente caso no ha habido vulneración alguna al principio de Legalidad, pues se ha actuado con estricto respeto a la legalidad, tanto en el desarrollo del Procedimiento Administrativo Sancionador, como en la normativa aplicada, incluyendo la que determina el sustento probatorio que el Concesionario no ha cumplido con presentar, de conformidad con exigencia establecida en la metodología v3.

[...]

Con relación a la supuesta vulneración al requisito de validez del acto administrativo: la motivación.

86. Al respecto, dado que, en el presente caso, en todo momento del procedimiento la valoración probatoria (técnica y legal) ha sido comunicada al Concesionario de manera oportuna, señalando los motivos por los cuales no se amparan sus argumentos de manera clara y explícita, no ha habido falta de motivación, por lo que no corresponde amparar las alegaciones del Concesionario en dicho extremo.

87. Asimismo, en virtud de lo señalado por la Jefatura de Contratos Portuarios, se tiene que el Concesionario no ha presentado argumentos que modifiquen las conclusiones abordadas en:

- La sección VII del Informe de Hallazgo N° 00364-2024-JCP-GSF-OSITRAN vinculado al indicador “Tiempo de Atención al Usuario para el retiro de su mercancía”, por promedio trimestral, correspondiente al periodo de evaluación; y,

En tal sentido, de la evaluación efectuada por la Jefatura de Contratos Portuarios, a través del Memorando N°00380-2024-JCP-GSF-OSITRAN de fecha 23 de septiembre de 2024, se tiene que dicha Jefatura se ratifica en los resultados de la medición contenidos en:

- El Informe N° 00364-2024-JCP-GSF-OSITRAN (Informe de Hallazgo) que sustentan el incumplimiento del promedio trimestral del indicador de NSP de “Tiempo de atención al usuario para el retiro de su mercancía”.

Cabe precisar que sobre la base de dicho Informe se realizó la imputación de cargos efectuada mediante Oficio N° 00084-2024-JFI-GSF-OSITRAN."

43. En base a lo expuesto, se evidencia que la decisión de la primera instancia no ha infringido el deber de motivación, ni los principios de legalidad y debido procedimiento, ajustando su conducta a la normativa aplicable, particularmente a la Metodología v3, cuyos requisitos APM no logró satisfacer. Respecto al principio de legalidad, la GSF ha actuado dentro de las facultades otorgadas explícitamente por el marco jurídico en el contexto del procedimiento administrativo sancionador. Además, la primera instancia ha fundamentado su decisión de manera suficiente, comunicando al Concesionario, de forma oportuna y clara, las razones de la desestimación probatoria, garantizando así el respeto al derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva, lo que desvirtúa cualquier alegación de falta de motivación o de vulneración del debido procedimiento.
44. Ahondando en este aspecto, cabe resaltar que el Concesionario ha reiterado los mismos argumentos esgrimidos en el curso del procedimiento alegando que el Ositrán no ha tomado en cuenta la documentación que ha presentado para acreditar los tiempos deducibles y que ello no es de responsabilidad del Concesionario, acreditación que debe efectuarse en los términos previstos por la Metodología V3. Tales argumentos han sido evaluados y desvirtuados por la primera instancia, lo cual se corrobora con el análisis contenido en los apartados precedentes.
45. En consecuencia, tras el análisis realizado, se demuestra que la GSF ha actuado conforme a la normativa aplicable, especialmente la Metodología v3, dentro de las facultades que le confiere el ordenamiento jurídico, fundamentando su decisión de manera adecuada y comunicando oportunamente al Concesionario las razones de la desestimación probatoria, garantizando su derecho de defensa y la tutela judicial efectiva.
46. Por lo tanto, se concluye que la primera instancia no ha vulnerado el deber de motivación, ni los principios de legalidad y debido procedimiento, desestimándose así el argumento del Concesionario en este sentido.

B.3. Sobre la supuesta vulneración al Principio de Predictibilidad

47. El Concesionario sostiene que la actuación de Ositrán al aplicar la metodología de APM vulnera el principio de predictibilidad, dado que dicha metodología fue aprobada conforme al Contrato de Concesión, el cual establece claramente los parámetros y procedimientos para las operaciones portuarias. Según el Concesionario, Ositrán no puede imponer requisitos o procedimientos no contemplados en dicho documento, ya que esto contravendría los acuerdos establecidos. Además, compara la situación con la metodología para la medición de los NSP del Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry, que define de manera clara los requisitos para acreditar los tiempos deducibles. En este contexto, APM afirma que ha cumplido correctamente con la acreditación de deducibles a través del sistema MOST, respaldado por declaraciones de veracidad. No obstante, alega que Ositrán ha rechazado arbitrariamente esta información, a pesar de que, en la Metodología del Terminal Portuario Salaverry se permite acreditar los tiempos deducibles mediante una declaración jurada, lo que refleja un trato desigual y discriminatorio. Este proceder, según el Concesionario, infringe el principio de predictibilidad o confianza legítima, que exige que la autoridad administrativa proporcione información clara, veraz y confiable sobre los procedimientos, permitiendo a los administrados comprender los requisitos y resultados esperados.

Análisis de los argumentos del Concesionario

48. En relación con la supuesta vulneración al principio de predictibilidad resulta pertinente citar lo expresado en el numeral 82 al 85 del Informe Final del Procedimiento N° 00001-2025-JFI-GSF-OSITRAN, en los términos siguientes:

Con relación a la supuesta vulneración al principio de predictibilidad o de confianza legítima

82. El Concesionario también alega una supuesta vulneración al principio de predictibilidad; al respecto, corresponde precisar que según Mateucci, el principio de predictibilidad, se origina en el sistema de derecho Anglosajón (Common Law) y se le conoce dentro de la doctrina del Derecho Administrativo Continental como el Principio de Seguridad Jurídica, también se le conoce como el Principio de Certeza, estas coincidencias también saltan a la vista por la simple comparación de las equivalencias idiomáticas de las palabras “certeza” y “seguridad jurídica”.

83. Al respecto, dicho autor precisa que la certeza o la seguridad jurídica, como términos que se asocian al principio de Predictibilidad, buscan establecer dos situaciones claramente delimitadas: Crear las bases para generar confianza en los administrados frente a las actuaciones de la Administración Pública. Reducir los niveles de corrupción, toda vez que, al publicarse los lineamientos, la discrecionalidad se reduce, ya que los administrados conocen de antemano la posible respuesta por parte de la Administración Pública.

84. En la misma línea de análisis, el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial han señalado en sus pronunciamientos, sobre el citado principio, lo siguiente:

“Los principios de participación y de predictibilidad, reconocidos en la Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley N°27444, son una expresión del principio constitucional de interdicción de la arbitrariedad y del deber de transparencia de las entidades públicas, en vinculación con el debido proceso. En tal sentido, las entidades de la Administración Pública tienen la obligación de brindar la oportunidad a los administrados de opinar sobre los temas materia de deliberación en la toma de decisiones que puedan repercutir en el ejercicio de sus derechos fundamentales (principios de participación); así también, deben poner a disposición de los administrados la información veraz, completa y confiable sobre los trámites que estos realicen, para que puedan prever el pronunciamiento final (principio de predictibilidad)”

“El principio de predictibilidad tiene dos finalidades diferentes. La primera es la que permite al administrado poder determinar previamente el posible resultado de un procedimiento, lo cual le permitirá elaborar los mecanismos de defensa más adecuados a sus intereses; y por otro lado, permitirá desincentivar la presentación de solicitudes sin mayor efectividad o legalidad, pues el administrado podrá conocer con cierta certeza la inviabilidad de su petición, pudiendo decidirse por la abstención en el ejercicio de la misma”

85. Así, en el presente caso, no se ha vulnerado el principio de Predictibilidad, pues la actuación del regulador a todo nivel ha venido siendo coherente, señalando que los deducibles invocados deben de estar debidamente acreditados (como consecuencia de la exigencia contenida en el Contrato de Concesión y en la Metodología v3) no habiendo contradicción entre la valoración y exigencia probatoria efectuada, en relación con procedimientos anteriores.”

49. De la revisión de lo citado, se verifica que el regulador ha mantenido una línea coherente en sus decisiones, aplicando rigurosamente los criterios establecidos en la Metodología v3, la cual establece de manera clara los requisitos para la acreditación de los deducibles, ofreciendo información veraz y confiable sobre los procesos y permitiendo a los administrados comprender los requisitos y obtener los resultados esperados. En consecuencia, la afirmación del Concesionario sobre un trato desigual y discriminatorio carece de sustento, en la medida que Ositrán ha actuado conforme sus obligaciones de manera objetiva y equitativa, sin tratar de manera desigual a los concesionarios portuarios.
50. En cuanto a la comparación con la metodología del Terminal Portuario Salaverry, es importante señalar que cada concesionario está sujeto a requisitos específicos derivados de sus contratos y metodologías particulares, los cuales han sido establecidos por la Autoridad Portuaria Nacional, por lo que la existencia de diferencias en los procedimientos de acreditación de deducibles entre APM y el Terminal Portuario Salaverry no implica una

vulneración del principio de predictibilidad, sino que estas diferencias se ajustan a lo dispuesto en la metodología aplicable a cada terminal portuario, sin que se pueda considerar que haya existido trato discriminatorio o injustificado hacia APM.

B.4. Sobre la supuesta vulneración al Principio de Imparcialidad

51. Sobre este punto, el Concesionario sostiene que la actuación del Ositrán vulnera el principio de no discriminación, contenido en el principio de imparcialidad regulado en el numeral 1.5 del artículo IV del TUP de la LPAG, que exige que las autoridades actúen sin discriminación y brinden un trato igualitario a todos los administrados. Así también, señala que el Tribunal Constitucional ha reconocido que el principio de Igualdad configura un límite en la actuación de los órganos públicos jurisdiccionales, estableciendo que la ley debe aplicarse de manera igual a situaciones sustancialmente iguales, sin diferencias basadas en personas o circunstancias que no estén previstas en la ley.
52. En este sentido, APM afirma que la discriminación, se concreta al infringir el derecho a la igualdad, por lo que su protección constitucional tiene el objetivo de impedir que se restrinjan derechos, se nieguen beneficios o se otorguen privilegios sin justificación objetiva, como en el presente caso, donde la diferencia de trato entre APM y otros concesionarios carece de fundamento razonable, evidenciando arbitrariedad y discriminación.

Análisis de los argumentos del Concesionario

53. En relación con la alegación de que Ositrán ha vulnerado el principio de imparcialidad, es pertinente resaltar lo establecido en el numeral 1.5 del artículo IV del TUP de la LPAG:

“Artículo IV. Principios del Procedimiento Administrativo (...)

Principio de imparcialidad. - Las autoridades administrativas actúan sin ninguna clase de discriminación entre los administrados, otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento, resolviendo conforme al ordenamiento jurídico y con atención al interés general”.

54. Asimismo, respecto al principio de imparcialidad, mediante la sentencia recaída en el Expediente 04375-2015-PHC/TC, el Tribunal Constitucional señaló lo siguiente:

“13. (...). El principio de imparcialidad posee dos acepciones: a) imparcialidad subjetiva, que se refiere a cualquier tipo de compromiso que pudiera tener el juez con las partes procesales o en el resultado del proceso; b) imparcialidad objetiva, que está referida a la influencia negativa que puede tener en el juez la estructura del sistema, restándole imparcialidad, es decir, si el sistema no ofrece suficientes garantías para desterrar cualquier duda razonable (...).”

55. Como puede apreciarse, el principio de imparcialidad implica la actuación de los órganos resolutivos sin ninguna clase de discriminación entre las partes y sin ninguna influencia negativa respecto a la controversia materia de análisis.
56. En el mismo sentido, resulta pertinente citar lo expresado en el numeral 100 al 103 del Informe Final del Procedimiento N° 00001-2025-JFI-GSF-OSITRAN, en los términos siguientes:

“Con relación a la supuesta vulneración al principio imparcialidad e igualdad

100. Con relación al argumento de vulneración de este principio que argumenta el Concesionario en la página 15 de su Escrito de descargos, debemos desestimar dicho argumento debido a que durante el trámite de este procedimiento sancionador el Regulador no ha efectuado ningún trato discriminatorio contra APMT, todo lo contrario, tal como se ha explicado en los numerales del 64 al 70 de este Informe; este Regulador, reconoce las características propias de cada Contrato de Concesión y las distintas disposiciones planteadas en las Metodologías.

101. En efecto, remarcamos lo expuesto por el mismo Concesionario en el penúltimo párrafo de la página 12 de sus descargos que expresa claramente algunas disposiciones específicas de la Metodología de Salaverry que no contiene las suyas y se reproduce a continuación:

✓ No obstante, a diferencia de ello, anotamos que en la Metodología Salaverry sí se desarrolla la manera en la que se acreditarán los deducibles, entre otros, desarrollando la posibilidad de utilizar un sistema físico o digital, incluyendo una serie de requerimientos para la acreditación de los deducibles, que, pese a que APMT no tiene recogidos en su Metodología, aun así, ilegalmente, OSITRAN exige y aplica, bajo consecuencia de imputar infracciones y sanciones indebidas contra APMT.

102. Por lo que, coincidimos con APM de que no es factible equiparar y dar un mismo tratamiento de evaluación a Metodologías que tienen distintas disposiciones y exigencias y que por lo mismo, corresponde ser evaluadas, cada una, atendiendo a sus propias estipulaciones.

103. Ahora bien, esta Jefatura ha evaluado y meritado todos los medios probatorios presentados por APMT, advirtiéndose, con base en el análisis técnico realizado por la Jefatura de Contratos a través del Memorando N°00380-2024-JCP-GSF OSITRAN en la etapa instructora, que no se ha desvirtuado los presuntos incumplimientos imputados al Concesionario con el Oficio N°00084-2024-JFI-GSF-OSITRAN.

[...]"

57. En ese contexto, corresponde evaluar si, durante la tramitación del presente procedimiento, la primera instancia actuó con algún tipo de discriminación en perjuicio del Concesionario, si existieron elementos ajenos al procedimiento que acrediten que el órgano resolutorio haya visto disminuida su imparcialidad al emitir su pronunciamiento, y si la primera instancia resolvió conforme al ordenamiento jurídico y con atención al interés general.
58. Al respecto, es preciso mencionar que conforme se desprende de los actuados, la primera instancia ha sustentado sus decisiones en el Contrato de Concesión y en la Metodología v3, que define los procedimientos y criterios para la medición y evaluación de los indicadores de calidad del servicio. En ese sentido, al afirmar que el Concesionario no ha presentado la documentación suficiente, ni detallada para justificar la falta de personal en las operaciones imputadas como incumplidas, no implica preferencia ni discriminación hacia las partes involucradas, sino una aplicación estricta de las normas que rigen el procedimiento, dado que la desestimación de las pruebas se debe a que éstas no cumplen con los requisitos para sustentar debidamente lo alegado por el administrado.
59. Es así que la primera instancia ha actuado en todo momento del presente procedimiento conforme a la Ley, el Contrato de Concesión y la normativa aplicable, buscando garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales de los concesionarios, no evidenciándose discriminación o trato desigual; no obstante, es el Concesionario que se limita a afirmar una supuesta vulneración sin exponer ni acreditar las razones que conllevan a ello, motivo por el cual, se desvirtúa el argumento presentado por el Concesionario en este extremo.

B.5. Sobre la supuesta vulneración a la Carga de la Prueba

60. En cuanto a la carga de la prueba, el Concesionario argumenta que, Ositrán le está exigiendo indebidamente demostrar su inocencia en base a una situación incierta, lo que vulnera el principio de carga de la prueba. Asimismo, señala que conforme al artículo 196 del Código Procesal Civil, quien afirma un hecho es quien debe probarlo, por lo que corresponde a Ositrán demostrar por qué la información proporcionada por APM no es suficiente y justificar el supuesto incumplimiento atribuido.

61. Además, APM sostiene que cumple con sus obligaciones contractuales y regulatorias como concesionario del Terminal Norte Multipropósito del Callao. Sin embargo, la imposición de una carga probatoria adicional sobre aspectos inciertos, sin garantías de aceptación por parte de Ositrán, genera un impacto negativo en sus operaciones y desconoce la realidad del funcionamiento del sector portuario.

Análisis de los argumentos del Concesionario

62. Antes de abordar las alegaciones del Concesionario, es necesario recordar que, conforme a las disposiciones contractuales y normativas aplicables, corresponde al Concesionario acreditar de manera trimestral el cumplimiento de los NSP, incluyendo el tiempo acumulado de las demoras ocasionadas por aquellos hechos que no le son imputables (deducibles) y que pueden ocurrir durante el desarrollo de cada una de las actividades que tienen efectos en los indicadores sujetos a medición por parte de Ositrán, incluyendo los indicadores de “Tiempo de atención al usuario para el retiro de su mercancía”, tal como lo indican las siguientes disposiciones normativas y contractuales:
- El segundo párrafo de la Cláusula 2.8; párrafos primero, segundo y quinto de la Cláusula 8.1; Cláusula 8.2; Cláusula 1.23.68; Cláusula 1.23.72, Cláusula 1.23.99, Cláusula 8.6; y Cláusula 8.21 del Contrato de Concesión;
 - El segundo párrafo del Anexo 3 del Contrato de Concesión, literal b) de la sección I del mismo Anexo y el literal b) del numeral 1 de la Metodología V3; y
 - El principio de concordancia previsto en el artículo 5 del Reglamento de Usuarios de las Infraestructuras de Transporte de Uso Público, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 035-2017-CD-OSITRAN (RUITUP) y los artículos 7 y 11 (literal a) del mismo reglamento.
63. Asimismo, en la Metodología v3 se establece que todo hecho no imputable al Concesionario (deducible) que sea debidamente acreditado por este será exceptuado de la medición del indicador materia de análisis. En ese sentido, en la medida que el Concesionario presente el registro y evidencia de algún hecho que no le sea imputable (deducible) debidamente acreditado -cumpliendo con los parámetros contemplados en la Metodología v3- el tiempo acumulado de dicho deducible será exceptuado de la medición del indicador que señale y, en general, de cualquiera de los indicadores que forman parte de los NSP del Terminal Norte Multipropósito sujetos a medición por parte de Ositrán.
64. En cuanto a la carga de la prueba, es oportuno contextualizar el análisis en el procedimiento administrativo sancionador que, en este caso, tiene como interés público protegido a la calidad en la prestación del servicio que es un derecho de los usuarios, reconocido por el literal f) del artículo 7 del RUITUP. Así, sobre la base del marco normativo y contractual descrito en los párrafos precedentes, la sanción impuesta al Concesionario obedece al incumplimiento de los estándares de calidad del servicio, medidos con el indicador “Tiempo de atención al usuario para el retiro de su mercancía” correspondiente al promedio trimestral, medición que se realiza de acuerdo con la Metodología v3.
65. Dicho incumplimiento se encuentra acreditado y fue expuesto con detalle en el Oficio de Imputación de cargos, donde se señaló que durante el periodo materia de análisis existieron transacciones que superaron los límites permitidos por los indicadores de NSP. En ese sentido, queda claro que la primera instancia no está invirtiendo la carga de la prueba del procedimiento sancionador, sino que cumplió con probar el incumplimiento del administrado. Ahora bien, lo que alega el Concesionario es que, a su criterio, los incumplimientos acreditados, en realidad deben ser deducidos de la medición.
66. Como se ha mencionado en los acápites precedentes, la Metodología v3 sí prevé que existen eventos que dan lugar a deducciones; por ese motivo, tal instrumento atribuye al Concesionario la carga de probar que dichos sucesos efectivamente han ocurrido. Para

efectos de las deducciones no basta la declaración unilateral del Concesionario, incluso si se encuentra registrada en sistemas auditados, porque ello no le resta su carácter unilateral; lo que se requiere es que evidencie por cada transacción la ocurrencia de los eventos o situaciones que den lugar a la deducción en sus hitos inicial y final, que no le son imputables.

67. No debe perderse de vista que el Contrato de Concesión contempla niveles de servicio precisamente en beneficio de los usuarios de la infraestructura, para la satisfacción de su derecho a la calidad en la prestación del servicio; en ese sentido, carecería de sentido establecer reglas de medición de NSP bajo las cuales, los incumplimientos detectados pueden ser rebatidos por el agente supervisado con información o documentación que tenga carácter unilateral.
68. Es sobre esos deducibles que la primera instancia concluye que no han sido acreditados debidamente y, en torno a ellos se debe tener en cuenta lo expresado por el Tribunal Constitucional en el fundamento 50 de la Sentencia emitida el 26 de enero de 2007, correspondiente al Expediente N° 01776-2004-AA/TC, en los siguientes términos:

“c. La utilización de la prueba dinámica

Se ha señalado prima facie que la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos, según lo presenta el artículo 196° del Código Procesal Civil. Frente a ello, la carga probatoria dinámica significa un apartamiento de los cánones regulares de la distribución de la carga de la prueba cuando ésta arroja consecuencias manifiestamente disvaliosas para el propósito del proceso o procedimiento, por lo que es necesario plantear nuevas reglas de reparto de la imposición probatoria, haciendo recaer el onus probandi sobre la parte que está en mejores condiciones profesionales, técnicas o fácticas para producir la prueba respectiva”.

(Subrayado agregado)

69. Igualmente, resulta pertinente señalar que el numeral 173.2 del artículo 173 del TUO de la LPAG establece que le *“Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones”.*
70. En línea con el criterio del Tribunal Constitucional y el marco legal, la Metodología v3 dispone que es responsabilidad del Concesionario acreditar la existencia de los deducibles que pretende aplicar a la medición de los indicadores de los NSP. En este sentido, le corresponde al Concesionario demostrar, acreditar, y probar los hechos que no le son imputables, ya que es él quien alega la existencia de los deducibles. Por lo tanto, resulta claro que la carga de la prueba en relación con los deducibles corresponde al Concesionario, quien debe acreditar de manera fehaciente y suficiente estos hechos ante Ositrán, conforme a las disposiciones de la Metodología v3.
71. En el presente caso, la carga probatoria en lo concerniente a los deducibles recae sobre APM, dado que se encuentra en la mejor posición para acreditar la existencia efectiva de los hechos que no le son imputables, en virtud de que es el Concesionario quien tiene el control y la gestión directa de las operaciones portuarias que podrían dar lugar a dichos deducibles.
72. Por lo expuesto, se evidencia que la primera instancia no ha vulnerado el principio de impulso de oficio, dado que cumplió con probar el incumplimiento del NSP referido al indicador "Tiempo de atención al usuario para el retiro de su mercancía" durante el Trigésimo Noveno trimestre de explotación (enero - marzo 2021). Esto se debe a que se analizaron los documentos presentados por el Concesionario, constatando que dichos documentos carecían de un respaldo suficiente, lo que no los hacía idóneos para acreditar los deducibles alegados, conforme a lo establecido en la Metodología v3. Además, durante el procedimiento, administrativo se notificó oportunamente al Concesionario sobre las deficiencias encontradas, brindándole la oportunidad de presentar documentación adicional que pudiera respaldar el cumplimiento de los NSP de los indicadores mencionados.

73. En suma, se demuestra que la sanción fue impuesta por infracciones que se encuentran debidamente acreditadas, siendo que la primera instancia cumplió adecuadamente con su obligación de revisar los documentos entregados por el Concesionario para justificar deducibles, notificándole oportunamente las deficiencias halladas y otorgándole la oportunidad de presentar pruebas adicionales, de acuerdo con lo establecido en la Metodología v3, lo que refuerza que no se vulneró el principio de impulso de oficio. En consecuencia, deben desestimarse los argumentos del Concesionario en este extremo del recurso.

B.6. Sobre lo dispuesto en la Constitución y la Ley del Sistema Portuario Nacional

74. Finalmente, el Concesionario señala que Ositrán pretende sancionarlo indebidamente por no cumplir con ciertos requisitos en el procedimiento de evaluación de sus NSP y presentación de deducibles, aplicando de manera subjetiva y arbitraria criterios que la metodología no establece, lo cual vulnera el derecho de APM a no ser discriminado, principio consagrado en el artículo 2.2 de la Constitución Política del Perú. Además, contraviene lo dispuesto en la Ley del Sistema Portuario Nacional (Ley N° 27943), que prohíbe la aplicación de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes entre operadores portuarios, garantizando así la igualdad ante la ley.

Análisis de los argumentos del Concesionario

75. Con relación a ello, como ya se ha mencionado, las sanciones impuestas no responden a una aplicación arbitraria de criterios, sino se fundamentan en la normativa vigente, particularmente en la Metodología v3, que establece los procedimientos y parámetros específicos para la medición de los indicadores de calidad de servicio y la acreditación de los deducibles.
76. Al contrario de lo que sostiene el Concesionario, Ositrán ha actuado de acuerdo con los procedimientos establecidos en dicha metodología, y la sanción impuesta está claramente justificada y aplicada ante un incumplimiento de los indicadores de calidad del servicio, que no fueron debidamente acreditados, no teniendo asidero el argumento alegado por el Concesionario sobre la vulneración al principio consagrado en el artículo 2.2 de la Constitución del Perú, sobre la no discriminación.
77. En cuanto a lo dispuesto en la Ley del Sistema Portuario Nacional (Ley N° 27943), que como bien señala el Concesionario, prohíbe la aplicación de condiciones desiguales entre administradores portuarios, no es el caso que se analice la aplicación de dicho extremo de la ley en el presente procedimiento sancionador; sin embargo, como ha quedado demostrado a lo largo del presente informe, Ositrán ha actuado dentro de los límites legales, garantizando que las sanciones y evaluaciones sean consistentes con los parámetros legales establecidos para todos los Concesionarios, sin privilegios ni diferencias arbitrarias. La igualdad ante la ley y el trato igualitario son principios que han sido respetados en el presente procedimiento, ya que las decisiones del órgano regulador se han basado en los mismos criterios para todos los operadores portuarios que se encuentren en situaciones similares, sin hacer distinciones.

IV. CONCLUSIONES

78. La sanción impuesta al Concesionario obedece al incumplimiento de los estándares de calidad del servicio, medidos con el indicador “Tiempo de atención al usuario para el retiro de su mercancía” correspondiente al Trigésimo Noveno trimestre de explotación (enero - marzo 2021), correspondiente a operaciones individuales, medición realizada de conformidad con lo dispuesto por la Metodología v3, incumplimiento que se encuentra debidamente acreditado.
79. Con relación a las deducciones que el Concesionario alega deben ser excluidas de la medición, se advierte que, en lo referido al cálculo del indicador “Tiempo de Atención al Usuario para el retiro de su mercancía” efectuado por la GSF, este responde a lo previsto en

la Metodología v3, la cual no establece ninguna restricción que limite la medición del indicador a las transacciones realizadas exclusivamente después del período de cuatro horas posteriores al cierre de operaciones de la nave. Esta afirmación se ve ratificada por la APN, entidad que aprobó dicho instrumento.

80. Respecto a las supuestas vulneraciones a los principios de motivación, legalidad y debido procedimiento, predictibilidad, imparcialidad, carga de la prueba, así como, una vulneración a la Constitución, a la Ley del Sistema Portuario Nacional y el alegado trato desigual o discriminatorio, son afirmaciones que a lo largo del presente informe han sido desvirtuadas, verificándose que la primera instancia actuó conforme a la normativa vigente, especialmente a la Metodología v3, cuyos requisitos no fueron cumplidos por APM, fundamentando adecuadamente su decisión, informando de manera oportuna y clara al Concesionario sobre las razones de la desestimación probatoria, lo que ha asegurado el respeto al derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva, así como a todos los principios establecidos en la normativa aplicable.

V. RECOMENDACIÓN

81. Se recomienda declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por APM Terminals Callao S.A. y, en consecuencia, confirmar en todos sus extremos la Resolución de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización N° 0003-2025-GSF-OSITRAN, de conformidad con los fundamentos antes expuestos.

Atentamente,

Firmado por
Javier Chocano Portillo
Jefe de la Gerencia de Asesoría Jurídica
Gerente de Asesoría Jurídica

Visado por
Christian Rosales Mayo
Jefe de la Jefatura de Asuntos Jurídico-Regulatorios y Administrativos (e)
Gerencia de Asesoría Jurídica

Visado por
José Zegarra Romero
Asesor Legal de la Jefatura de Asuntos Jurídicos-Regulatorios y Administrativos
Gerencia de Asesoría Jurídica

Se adjunta lo siguiente:
- Proyecto de Resolución de Gerencia General
- Proyecto de Oficio de Gerencia General

NT: 2025033665